



**LA ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD – ADRES**

RESOLUCIÓN NÚMERO 159965 DE 2025

(20 de noviembre 2025)

"Por medio de la cual se revoca la Resolución No. 26347 del 11 de septiembre de 2019"

**LA DIRECTORA DE OTRAS PRESTACIONES (E) DE LA ADMINISTRADORA DE
LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD –
ADRES**

En ejercicio de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos, 114 del Decreto Ley 019 de 2012 modificado por el Decreto Ley 2106 de 2019, en desarrollo el parágrafo del artículo 2.6.1.4.3.14 del Decreto 780 de 2016, numeral 1º y 5º del artículo 17 del Decreto 1429 de 2016 y el numeral 2º del artículo 6º de la Resolución 1012 de 2022 y,

1. ANTECEDENTES

- 1.1 Que el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social -ADRES, en el marco de la competencia conferida en el artículo 16 de la Resolución No. 16571 del 4 de junio de 2019 modificada por la Resolución No. 22199 del 4 de septiembre de 2019, mediante la Resolución No. 8097 de fecha 17 de mayo de 2019, ordenó el cobro en contra del(la) señor(a) **GONZALO CUASTUMAL CAIPE**, identificado(a) con CC No. 5314328, por valor de **DIECISEIS MILLONES CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MCTE, (\$16.108.747.00)**, indicando que esta suma debe ser indexada durante el periodo comprendido entre la fecha de pago de la reclamación y la fecha de expedición de dicho acto administrativo, más los intereses que se causen a partir de su firmeza y hasta la fecha de pago.
- 1.2 El acto administrativo fue notificado por aviso publicado en la página web, el día 18 de febrero de 2020, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
- 1.3 Que mediante radicado 20256306175762 del 05 de noviembre de 2025, el señor **GONZALO CUASTUMAL CAIPE**, presentó solicitud ante la Entidad, argumentando entre otras cosas, la falta de titularidad sobre el vehículo de placa GSD90B.
- 1.4 Que con fundamento en los documentos que obran en el expediente, esta Dirección procederá a revocar el acto administrativo **Resolución No. 26347 del 11 de septiembre de 2019**, teniendo en cuenta que con su expedición se está afectando injustificadamente a una persona.

2. PROCEDENCIA DE LA REVOCATORIA

En prevalencia de los derechos al debido proceso y de defensa y contradicción de que son titulares las personas naturales y jurídicas inmersas en un proceso como el que nos ocupa, se procedió a revisar las piezas procesales, encontrando:

Que el artículo 93 de la Ley 1437 del 2011, consagra que:

"CAUSALES DE REVOCACIÓN. Los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:

"Por medio de la cual se revoca la Resolución No. 26347 del 11 de septiembre de 2019"

1. *Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.*
2. *Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él*
3. *Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona."*

La revocatoria es la prerrogativa que tiene la administración para enmendar, en forma directa o a petición de parte, sus actuaciones contrarias a la ley o a la Constitución, que atenten contra el interés público o social o que generen agravio injustificado a alguna persona. Así mismo, en tanto que la administración puede extinguir sus propios actos por las causales previstas en la ley y está facultada para hacerlo en cualquier momento; adicionalmente es una obligación que forzosamente debe asumir en los eventos en que, de oficio, constate la ocurrencia de una de las causales señaladas. Si así fuere, la administración tiene el deber de revocar el acto lesivo de la constitucionalidad o legalidad o atentatorio del interés público o social o que causa agravio injustificado a una persona.

Sobre el particular, la Corte Constitucional mediante **Sentencia del 18 de noviembre de 2020 (Rad. 25001-23-42-000-2014-04437-01)**, precisa sobre la revocatoria directa lo siguiente:

"(...) En relación con la revocatoria directa de los actos administrativos de carácter general, al igual que ocurre con los particulares, la Ley 1437 de 2011, artículo 93, establece, en forma precisa las causales que imponen a la Administración dicha revocatoria, de oficio o a petición de parte. Tales causales son las siguientes: Que se evidencie una manifiesta oposición entre el acto respectivo y la Constitución o la ley, esto es, que la oposición sea grosera, de bulto, es decir, cualitativamente similar a la que da lugar a la suspensión provisional de los actos administrativos, por parte de esta Jurisdicción. Que haya inconformidad con el interés público o social, esto es que el acto administrativo en cuestión no consulte, o mejor, contrarie esos intereses generales, causal respecto de la cual se ha sostenido que comporta el retiro de un acto legalmente válido por la propia administración que lo había expedido, en razón de la inoportunidad o inconveniencia de aquél, vinculándose a la noción del mérito del acto administrativo. Que a través del acto correspondiente se cause un agravio injustificado a una persona. (...) los actos administrativos de carácter particular y concreto no podrán ser revocados sin el consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular, pues dichos actos implican la creación, modificación o reconocimiento de derechos de naturaleza individual y determinada. (...)"

Así mismo, la **sentencia 2013-00577 de 2020** proferida por el Honorable Consejo de Estado dispuso lo siguiente: **"De la revocatoria directa de los actos administrativos de carácter particular y concreto.**

En relación con los actos administrativos conviene recordar que se constituyen en la expresión unilateral de la voluntad de la Administración, dirigida a crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas generales de carácter abstracto e impersonal y de carácter particular y concreto respecto de una o varias personas determinadas o determinables.

Tanto los actos administrativos generales y abstractos como los particulares y concretos, pueden ser sustraídos del mundo jurídico por cuenta de las mismas autoridades administrativas que los profirieron, bien sea de oficio o a solicitud de parte, cuando como expresamente lo ordena el Artículo 69 del CCA: sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o la ley; no estén conformes con el interés público o social o atenten contra él; o si con ellos se causa agravio injustificado a una persona.

Específicamente en cuanto a los actos de contenido particular y concreto, se debe precisar que la Administración puede revocarlos, bien sea de manera directa o demandando su propio acto a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho en la modalidad de lesividad, siempre y cuando se configuren las causales anteriormente descritas de que trata el Artículo [69](#)".

"Por medio de la cual se revoca la Resolución No. 26347 del 11 de septiembre de 2019"

En relación con el debido proceso, la Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-980 de 2010, ha señalado que el mismo no solo aplica al procedimiento judicial sino también a todas las actuaciones administrativas, y con ello a todo el actuar de la administración pública: *"... la Constitución extiende la garantía del debido proceso no solo a los juicios y procedimientos judiciales, sino también a todas las actuaciones administrativas. Ello significa, que el debido proceso se mueve también "dentro del contexto de garantizar la correcta producción de los actos administrativos, y por ello extiende su cobertura a todo el ejercicio que debe desarrollar la administración pública, en la realización de sus objetivos y fines estatales, es decir, cubija a todas sus manifestaciones en cuanto a la formación y ejecución de los actos, a las peticiones que realicen los particulares, a los procesos que por motivo y con ocasión de sus funciones cada entidad administrativa debe desarrollar y desde luego, garantiza la defensa ciudadana al señalarle los medios de impugnación previstos respecto de las providencias administrativas, cuando crea el particular, que a través de ellas se hayan afectado sus intereses".* (Negrilla y subrayado fuera de texto).

El Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Cuarta de 25 de octubre de 2017 se pronunció sobre las modalidades de revocatoria directa en la **Sentencia 73001-23-31-000-2008-00237-01** señalando lo siguiente:

"(...) No obstante, del examen de la normativa positiva que la regula (artículos 69 a 74 del Código Contencioso Administrativo) se puede concluir que tiene dos modalidades: de un lado, como mecanismo de utilización directa por parte del sujeto pasivo del acto frente a la autoridad que lo produjo o ante su inmediato superior y, de otro, como medida unilateral de la Administración para dejar sin efecto decisiones adoptadas por ella misma. En el segundo caso, es un mecanismo ya no alternativo sino adicional al de la vía gubernativa, del que puede hacer uso la Administración de manera oficiosa, bajo ciertas circunstancias y limitaciones, para revisar y corregir la manifiesta antijuridicidad, inconveniencia, o el agravio injustificado que cause alguno de sus actos administrativos. Es, en efecto, un mecanismo unilateral de la administración otorgado por el legislador, con el fin de revisar sus propias actuaciones y, dentro del contexto de la actuación oficiosa, sacar del tránsito jurídico decisiones por ella misma adoptadas". Mediante esta figura, la Administración, de oficio o a solicitud de parte, deja sin efecto los actos administrativos expedidos por ella misma, por las causales y conforme con el trámite consagrado en la ley. (Negrilla y subrayado fuera de texto). (...)"

3. CONSIDERACIONES DE ESTA DIRECCIÓN

Que, revisadas las pruebas allegadas, resulta procedente revocar de manera oficiosa la **Resolución No. 26347 del 11 de septiembre de 2019**, por medio de la cual se ordena el cobro de las obligaciones reconocidas y pagadas por la ADRES, por cuanto con ella se causa un agravio injustificado al señor **GONZALO CUASTUMAL CAIPE**, teniendo en cuenta que la misma aportó certificado del Registro Único Nacional de Tránsito Histórico Vehicular, de fecha 05 de noviembre de 2025 del automotor de placa GSD90B, expuesto a continuación:

"Por medio de la cual se revoca la Resolución No. 26347 del 11 de septiembre de 2019"



Solicitud No. 2135724

REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO
HISTÓRICO PROPIETARIOS

Página 1 de 1

Identificación : GSD90B

Expedido el 05 de noviembre de 2025 a las 11:00:18 a. m.

**"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA HISTORIA DE LOS PROPIETARIOS DEL VEHÍCULO
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"**

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS				
Tipo Documento	Nro. Documento	Nombres	Fecha Inicio	Fecha Fin
C.C.	19313295	VICTOR OLARTE PARDO	29/05/2007	ACTUAL

De la lectura del certificado expedido por la secretaria de tránsito de Girardot se establece que, para la fecha del accidente de tránsito, esto es el día 20/11/2015, el señor **GONZALO CUASTUMAL CAIPE**, **NO ERA EL PROPIETARIO** del automotor de placa GSD90B, razón por la cual, no es procedente dar continuidad al proceso de cobro que nos ocupa.

Conforme lo anterior, se evidencia que el acto administrativo que ordenó el cobro se encuentra enmarcado en la causal 3 del artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, pues al encontrarse prueba que impide continuar la actuación contra del señor **GONZALO CUASTUMAL CAIPE**, deberá revocarse la resolución del asunto.

En consecuencia, se procederá a revocar lo ordenado mediante **Resolución No. 26347 del 11 de septiembre de 2019**, con fundamento en lo expuesto, pues quedo plenamente demostrado que el vehículo de placa **GSD90B**, no era de propiedad del señor **GONZALO CUASTUMAL CAIPE**, para el momento de la ocurrencia de los hechos.

En virtud de lo anteriormente expuesto, este Despacho:

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR la **Resolución No. 26347 del 11 de septiembre de 2019**, en el sentido de excluir al señor **GONZALO CUASTUMAL CAIPE**, identificado con cédula de ciudadanía No. 5314328 de la obligación impuesta, por encontrarse probado que no ostentaba la calidad de propietario del vehículo GSD90B a la fecha del accidente de tránsito de fecha 20/11/2015.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar al señor **GONZALO CUASTUMAL CAIPE**, identificado con cédula de ciudadanía 5314328, el contenido de la presente resolución, en los términos de los artículos 67 y 68 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Destinatario	Dirección física y/o electrónica	Ciudad
GONZALO CUASTUMAL CAIPE	vimacasesores@gmail.com	CALI/VALLE DEL CAUCA



RESOLUCIÓN NÚMERO 159965 DE 2025

HOJA No. 5 de 5

"Por medio de la cual se revoca la Resolución No. 26347 del 11 de septiembre de 2019"

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente decisión a la Dirección de Gestión de los Recursos Financieros de Salud y a la Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones de la ADRES, para que adelanten las actuaciones que correspondan en el marco de sus competencias.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar la presente decisión a la Oficina Asesora Jurídica, para que adelanten las actuaciones que correspondan en el marco de sus competencias.

ARTÍCULO QUINTO: Indicar que contra la presente resolución no procede recurso alguno.

Dada en Bogotá D.C., a los (20) días del mes de noviembre de 2025.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



Firmado Digitalmente por
Yasmín Escamilla B.
Directora (E) de Otras Prestaciones

YASMÍN ESCAMILLA B.

Directora (E) de Otras Prestaciones
Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud
(SGSSS) – ADRES

Revisó: Rafael Enrique Roa - Abogado Contratista
Elaboró: Yuly Paola Prieto Rodríguez - Contratista
Expediente: 20231220510300297E